

Jorge Aragón
Fernando Lezcano

Notas sobre ¿qué Europa queremos?

LA Unión Europea vive la crisis más grave desde su creación en los años 50, hasta el punto de que cada vez es más frecuente leer análisis que plantean su posible ruptura, a partir de la salida de Grecia de la zona euro con consecuencias desconocidas sobre el resto de Estados miembros; un tema hasta ahora considerado como tabú. También va siendo habitual establecer un paralelismo entre la crisis actual y la depresión de los años 30, no solo en términos económicos —la posibilidad de que la llamada Gran recesión de 2009 se esté transformado en una nueva Gran depresión— sino especialmente políticos, recordando que los errores del Tratado de Versalles y el empecinamiento en las políticas de austeridad provocaron el derrumbe de la República de Weimar en Alemania y de la democracia, dando paso al III Reich y al nazismo que derivó en la II Guerra mundial. ¿Estamos viviendo una nueva guerra europea, en este caso no bélica sino económica, que dé al traste con las bases sobre las que se fundó la construcción europea como espacio político y democrático de convivencia pacífica? ¿Es posible la ruptura de la Unión Europea? ¿Estamos asistiendo al desmantelamiento del Estado de bienestar y del modelo social europeo porque no hay alternativas?

La gravedad de estas preguntas, que se plantean ya con frecuencia en los medios de comunicación, es buena muestra de la situación de emergencia que estamos viviendo y que requiere una reflexión más allá de los sobresaltos cotidianos de la evolución de la prima de riesgo de algunas deudas soberanas o las bolsas de valores, de las crecientes dudas sobre la situación del opaco sistema financiero a pesar de que la crisis se inició hace un lustro, del continuado anuncio de medidas de recortes en el gasto público en los países más endeudados, o del permanente y cada vez más alarmante aumento de las cifras de desempleo, pobreza y sufrimiento social. Y es a esta reflexión a la que pretende contribuir esta *Gaceta Sindical: Reflexión y Debate* con el título de ¿Qué Europa queremos?, desde la consideración de que la construcción europea es un proyecto no solo económico sino político y social, que tiene como referente la democracia y el Estado de bienestar y que necesita la implicación del conjunto de la ciudadanía, sea del país que sea.

UN DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO

Merece recordar algunos de los factores que contribuyen a explicar que la crisis haya llegado a su situación actual. En primer lugar, porque se llevó a cabo un diagnóstico equivocado de sus causas, tanto en el ámbito internacional como en el de la UE. Se consideró que era una crisis financiera, aunque rápidamente se demostró que se extendía con especial intensidad a la economía productiva. Además, porque se pensó que afectaba a los países más desarrollados (EEUU y UE), sin implicar a los países emergentes y los menos desarrollados —la hipótesis de la desconexión— lo que, vistas las previsiones económicas de los organismos internacionales, se está demostrando falso. También, porque se creyó que era una crisis pasajera y, tras la Gran recesión de 2009, a partir de 2010 florecerían “los brotes verdes al final del túnel”.

Finalmente, porque en el ámbito de la UE se consideraba —desde la óptica de la hegemonía económica del gobierno conservador de Alemania— que era una crisis solo de algunos países, los llamados periféricos, que debían hacer frente individualmente al alto nivel de endeudamiento que habían generado en la etapa de expansión y a sus “burbujas” financieras y/o inmobiliarias.

Y sobre estos diagnósticos equivocados se aplicaron políticas erróneas. En el ámbito internacional se recurrió a los acuerdos en un improvisado y a-democrático G20, sin capacidad ejecutiva, y al que las bastante obsoletas instituciones internacionales —el FMI, el BM o la OMC— asisten más como observadores que como protagonistas. El resultado es que, tras los primeros y esperanzadores acuerdos en 2008 y 2009 con vistas a fomentar una coordinación de las políticas económicas para impulsar activamente la recuperación, adoptar las reformas necesarias para una mejor regulación del sector financiero, evitar la inestabilidad y la especulación y promover que el crédito volviera a fluir hacia las empresas productivas, los citados acuerdos quedaron solo en declaraciones de intenciones que no se han llevado a cabo. La diferente situación económica de los principales países ha llevado, finalmente, a una política de “cada uno a lo suyo”.

Buena muestra de la falta de cooperación internacional fue el fracaso de la petición de la UE, en la Cumbre del G20 celebrada el 3 de noviembre de 2011 en Cannes, bajo presidencia francesa, de un mayor apoyo internacional en las intervenciones contra la crisis de las deudas soberanas. A esta falta de cooperación internacional ha contribuido directamente la propia UE, que no ha sido capaz de hablar “con una sola voz” sino expresando la posición individual, a veces contradictoria, de sus principales Estados miembros.

Con ello, se han seguido manteniendo el papel de las corruptas agencias de *rating*, los paraísos fiscales y los procesos especulativos relacionados con los flujos de capital no solo en los mercados financieros sino hacia los mercados de materias primas, como el oro, pero también de productos básicos de alimentación, de consecuencias devastadoras principalmente en los países empobrecidos, pero no sólo, y agravados por el aumento de los precios de los productos energéticos, en especial del petróleo. Tampoco se ha avanzado en el establecimiento de una nueva arquitectura institucional que, desde la ONU al FMI, reflejara el creciente sentido multipolar de mundo actual, lejos del diseñado tras la II guerra mundial. Y, con este abandono, la pérdida de impulso de los compromisos de actuar internacionalmente para combatir el cambio climático, cumplir los Objetivos del Milenio o fomentar el trabajo decente.

UNAS POLÍTICAS ERRÓNEAS: LA OBSESIÓN CONSERVADORA POR LA AUSTERIDAD

Las políticas adoptadas desde mayo de 2010 en la UE se han centrado en las llamadas políticas de austeridad como única vía para actuar frente a la crisis, partiendo de la idea antes señalada de que esta era un problema exclusivo de los países más endeudados.

La ortodoxia de los gobiernos conservadores ha impuesto la vía de reducción de los niveles de déficit y deuda pública, endureciendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con nuevos procedimientos de control y sanción por parte de las instituciones europeas, mediante el establecimiento de las nuevas medidas de gobernanza económica (conocido como “six pack”) para todos los países miembros, y la adopción de medidas adicionales de control —especialmente para la zona euro— que incluyen también el control de algunos desequilibrios macroeconómicos, y que incorporan las llamadas reformas estructurales —en particular las relacionadas con la desregulación del mercado de trabajo, la negociación colectiva y los procesos de formación de salarios— a las políticas de austeridad. Una orientación que ha tomado cuerpo en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (conocido como Pacto Fiscal) de carácter intergubernamental, firmado a principios de marzo de 2012 y al que se han incorporado un total de 25 países, con la exclusión del Reino Unido y la República Checa.

Rápidamente se ha dejado de lado gran parte de la Estrategia UE 2020 —aprobada a principios de 2010 para orientar las actuaciones conjuntas en toda la década—

da— que vino a sustituir a la Estrategia de Lisboa 2000-2010 y que incorpora, a pesar de sus limitaciones, medidas de actuación común para fomentar el crecimiento y el empleo, mejorar los niveles educativos y la investigación y la innovación como bases para fomentar la competitividad de la UE y luchar contra la creciente desigualdad social y la pobreza. Merece recordar su título: “Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” para comprender el corto alcance de sus compromisos en el escenario de la crisis. En realidad, se está eligiendo el camino no inteligente de recortes del gasto público sin crecimiento.

Este empecinamiento en los ajustes presupuestarios ha acabado con las tímidas perspectivas de una cierta recuperación de la economía y el empleo en la Unión Europea que se atisbaban en el primer trimestre de 2011, y ha llevado a un nuevo agravamiento de la crisis, al estancamiento económico en el conjunto de la UE y a la entrada en recesión de un número importante de países, no solo los llamados periféricos.

POCAS MEDIDAS PALIATIVAS, CORTOPLACISTAS Y TITUBEANTES

Paralelamente, las pocas medidas paliativas que se han ido adoptando para afrontar la crisis de la deuda han sido titubeantes y tardías como la creación el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) a final de 2009, con carácter temporal y una insuficiente dotación, cuyo presupuesto tuvo que ser ampliado pocos meses después, y la posterior creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad a final de 2011, como instrumento permanente que debería estar en funcionamiento a mitad de 2013; fecha que se ha tenido que adelantar a mediados de 2012 por el agravamiento de la crisis.

También lo han sido las intervenciones del Banco Central Europeo para facilitar liquidez a las entidades financieras y suavizar la crisis de las deudas soberanas, que se han hecho con carácter excepcional, solo a final de 2011 y principios de 2012, sin proyección de futuro, soslayando deficiencias institucionales que deberían haber sido corregidas y solo cuando, tras aumentos de los tipos de interés de referencia en 2008 y a mediados de 2011, la evidencia de la gravedad de la crisis era manifiesta.

El resultado ha sido que a los rescates de Irlanda y Portugal se sumó la necesidad de un nuevo rescate a Grecia, en julio de 2011, suavizando los leoninos tipos de interés y los periodos de vencimiento de la deuda inicialmente establecidos en el primer

rescate, que solo se ha hecho efectivo a principios de 2012 con una importante quita a las entidades financieras prestamistas, pero manteniendo las condiciones de un gravísimo ajuste fiscal que condena al país a una depresión larga y severa.

Y son estos factores: un diagnóstico erróneo de la crisis, una política suicida de austeridad y acciones positivas pero parciales, tardías y muy lentas en su ejecución, los que explican la creciente profundización de la crisis y la extensión del llamado “contagio” de problemas focalizados de algunos países de tamaño relativamente reducido (como Grecia, Irlanda y Portugal) a países como España e Italia (demasiado grandes para caer sin que caiga o se fragmente el euro) pero también a otros como Bélgica, Holanda y Francia.

EL CUESTIONAMIENTO DE LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DEL PROYECTO EUROPEO

Es de subrayar que esta nueva gobernanza se haya desarrollado con el creciente protagonismo de las decisiones adoptadas por el hasta ahora llamado “eje Alemania-Francia” en detrimento de las instituciones europeas, tanto de la Comisión y el Parlamento Europeo como del propio Consejo Europeo. Un hecho reflejado en la pérdida de importancia de las Presidencias rotatorias en la toma de decisiones, o en el rechazo de ambos países a la propuesta de Herman Van Rompuy como Presidente del Consejo, apoyada por la Comisión, de estudiar la posibilidad de llevar a cabo una emisión conjunta de deuda a largo plazo por los países de la eurozona. También, en la decisión de que el acuerdo para la “constitucionalización” de la regla de estabilidad presupuestaria a lo largo de ciclo económico se recogiera en un tratado internacional/intergubernamental, que no se incorpora al corpus comunitario. Un reflejo de lo que se ha dado en llamar la germanización del proyecto europeo, aunque sería más adecuado hablar de la europeización de la política conservadora alemana, que puede generar una Europa no a dos sino a muchas velocidades, con una creciente fragmentación política expresada en una especie de “*frankenstein* institucional”.

La crisis económica, la falta de respuestas cooperativas para promover el crecimiento y el aumento del empleo y la opción por un gobierno basado en las políticas de austeridad que solo producen más desempleo, pobreza y sufrimiento social, están generando una creciente pérdida de las señas de identidad común de la construcción europea entre los ciudadanos y la vuelta al enfrentamiento entre países, y a que cada vez se dé más crédito a los discursos pre-fascistas que echan la culpa de lo

que ocurre a los vecinos —los alemanes son unos autoritarios, los españoles unos vagos, los franceses unos soberbios, los escandinavos egoístas, los griegos mentirosos...— y, cómo no, a los inmigrantes, y cuyo reflejo más evidente es el creciente protagonismo de partidos políticos de extrema derecha en las elecciones políticas de múltiples países.

LAS CONSECUENCIAS DE UN ENFOQUE ASIMÉTRICO, NACIONALISTA Y NO COOPERATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA

La crisis europea actual está poniendo de manifiesto la inconsistencia de haber adoptado una Unión Monetaria sin políticas fiscales comunes, más allá del Pacto de Estabilidad, y sin un presupuesto europeo significativo, es decir, sin avanzar acompasadamente en la Unión Económica y Política, y en la Europea Social, como ya apuntó hace años la CES con su “sí crítico al Tratado de Maastricht” y como también pusimos de manifiesto en CCOO en 1998, antes de la entrada en vigor del euro, señalando: “La creación de la Unión Económica y Monetaria supone un paso necesario y coherente en el desarrollo del Mercado Único Europeo, pero la cesión de soberanía que implica la renuncia a los tipos de cambio para regular los desequilibrios económicos en cada país —y a la autonomía de la política monetaria y fiscal— requieren el desarrollo de un presupuesto comunitario con un significativo potencial estabilizador frente a perturbaciones que afecten de manera diferente a cada uno de ellos —los llamados *shocks* asimétricos— en cuya ausencia se pondrá en peligro el propio objetivo de estabilidad que inicialmente se pretendía conseguir.”¹. Una inconsistencia que se vio agravada con las sucesivas ampliaciones, hasta constituir la UE27 sin haberse dotado de compromisos políticos e institucionales coherentes con la ambición del proyecto que se abordaba. Merece recordar el fracaso de establecer una Constitución europea y el pobre contenido del Tratado de Lisboa, que se aprobó en diciembre de 2009, con unos compromisos incapaces de hacer frente al escenario de la crisis económica.

Sin embargo, quizás la primera enseñanza de la crisis es el camino erróneo de las políticas nacionalistas que defienden los gobiernos conservadores, que parecen no querer entender que las economías europeas están crecientemente interrelacionadas y que lo que para algunos países se traducían en déficit de su balanza exterior por cuenta corriente era la otra cara de la moneda de los superávits de otros países, principalmente de Alemania. Y ha sido esta interrelación la que explica que, con una

¹ Aragón, J. (1998): “Unión Monetaria y empleo en la construcción europea”, en *Euro y empleo*. CES.

moneda común y en un período de bajos tipos de interés, los déficits de unos países se hayan financiado con los flujos de capital y crédito de los países con excedente, con lo que obtenían sustanciosos beneficios, al menos en apariencia, alimentando las burbujas financieras e inmobiliarias.

Esta evidente interrelación también explica que la opacidad en los balances de las entidades financieras en los países periféricos, en sus niveles de solvencia — como en esta coyuntura el caso de España —, tenga su claro correlato en la opacidad de los niveles de riesgo que tienen contraídos las entidades financieras de países como Alemania, Francia o Reino Unido. El proceso de “desendeudamiento” —fundamentalmente privado— de los países periféricos está en estrecha relación con la situación de las entidades financieras de los países prestamistas, aunque se intente lanzar la cortina de humo de que el problema es principalmente de la deuda pública cuando su origen real ha sido una acumulación parasitaria de capital privado. Sin embargo, siguen sin desarrollarse mecanismos suficientes de regulación y supervisión de las entidades financieras en el conjunto de la UE y no solo de los países periféricos, aunque sean estos los que están en el “punto de mira” de las instituciones europeas; pero sus destinos están claramente interrelacionados.

El problema de fondo está en este enfoque asimétrico, que se agudiza con las políticas de reducción de gasto que no solo llevan a la recesión económica sino que hacen impagables las deudas, generando una creciente fragmentación del espacio europeo. Y merece tener en cuenta que una UE fragmentada ocupa un papel muy marginal en un escenario mundial cada vez más multilateral, con una creciente presencia de los países emergentes —especialmente China— y la sitúa cada vez más en la “periferia internacional”; una situación que no solo afecta a los países europeos periféricos sino también a Alemania y al conjunto de los Estados miembros.

CONSTRUIR UN NUEVO ESCENARIO POLÍTICO Y SOCIAL

La CES, en su Resolución de marzo de 2011, criticó el nuevo proceso de gobernanza y lo hizo planteando propuestas en positivo, relacionadas con aumentar la dotación de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), reducir los tipos de interés, emitir eurobonos y, especialmente, con la propuesta de un Programa Europeo de Inversiones del 1% del PIB financiado mediante diferentes impuestos (transacciones financieras, paraísos fiscales, impuestos sobre las rentas altas, armonización de bases del impuesto a empresas). También, evitando el destructivo círculo vicioso del ajuste fiscal en el corto plazo haciéndolo de forma más pausada

(situar el objetivo del déficit público del 3% en 2016-17). Igualmente ha defendido la necesidad de evitar la precariedad laboral y salarial (establecer salarios mínimos...) porque los salarios son el motor de la economía y no un instrumento de ajuste (Resolución del Congreso de Atenas). Unas propuestas que ha resumido en la defensa de un nuevo contrato social europeo.

Esta perspectiva subraya la necesidad de entender los problemas y propuestas desde una perspectiva común —lo que da sentido a la propia CES— más allá de posiciones puramente nacionales, desarrollando una estrategia europea común de crecimiento, abogando por un Pacto Europeo de Inversiones para evitar que las políticas de ajuste acaben transformando la recesión económica en una prolongada depresión en Europa. El objetivo es acordar medidas que fomenten el crecimiento económico y, específicamente, para “reindustrializar” los países con más déficit y deuda exterior, evitando la competencia salarial y fiscal como vía de salida y de agudización de la crisis, potenciando nuevos sectores de alta demanda que fomenten las exportaciones y faciliten el pago de su deuda.

Como apuntábamos en el anterior número de esta revista, “hay alternativas y hay que construirlas política y socialmente”, y en este sentido merece hacer una breve referencia al nuevo escenario que se plantea tras el triunfo de François Hollande en las recientes elecciones presidenciales francesas, y en las elecciones regionales de otros países como Alemania o el Reino Unido, que permiten atisbar algunos cambios en el aplastante mapa conservador que hegemoniza el marco político europeo.

Estos cambios tienen que ver con el progresivo reconocimiento del fracaso de las políticas de austeridad aplicadas en la UE, y con que el debate entre austeridad y crecimiento esté ocupando un mayor espacio en los debates políticos —como en la reciente cumbre del G-8 en Camp David o en la Cumbre informal y extraordinaria del Consejo Europeo a final de mayo. Ciertamente, sus resultados son exiguos y contradictorios, con notables dudas sobre si sus declaraciones se quedarán en mera retórica o se plasmarán en medidas concretas.

La adopción de una “agenda para el crecimiento” es imprescindible para romper el destructivo fundamentalismo de la austeridad basada en los recortes públicos, que llevan a la ruptura de la construcción europea. Pero también obliga a recordar que el crecimiento no es un fin en sí mismo sino que debe estar asociado a objetivos como la creación de empleo de calidad, la lucha contra la pobreza o la sostenibilidad ambiental, y también obliga a repensar el concepto de austeridad, que no necesariamente tiene que estar basado en los recortes del gasto público, como está ocu-

rriendo en la actualidad, sino en la lucha contra el despilfarro, la corrupción y el fraude, y también contra modelos de consumo ajenos a las necesidades sociales no mercantiles, depredadores del medioambiente y basados en una distribución de la renta crecientemente desigual.

Merece la pena, para cerrar estas páginas, revivir las reflexiones sobre la austeridad planteadas por el secretario del PCI, Enrico Berlinguer, en enero de 1977 en las Conclusiones ante la Convención de intelectuales en Roma, en el contexto de una crisis muy diferente: *La austeridad no es hoy un mero instrumento de política económica al que hay que recurrir para superar una dificultad temporal, coyuntural, para permitir la recuperación y la restauración de los viejos mecanismos económicos y sociales. Así conciben y presentan la austeridad los grupos dominantes y las fuerzas políticas conservadoras. Para nosotros, por el contrario, la austeridad es el medio de impugnar por la raíz y sentar las bases para la superación de un sistema que ha entrado en una crisis estructural y de fondo, no coyuntural, y cuyas características distintivas son el derroche y el desaprovechamiento, la exaltación de los particularismos y de los individualismos más exacerbados, del consumismo más desenfrenado. Austeridad significa rigor, eficiencia, seriedad y también justicia, es decir, lo contrario de lo que hemos conocido y sufrido hasta ahora y que nos ha conducido a la gravísima crisis cuyos daños hace años que se acumulan y se manifiestan hoy en Italia en todo su dramático alcance. Es, pues, en base a este enfoque como el movimiento obrero puede enarbolar la bandera de la austeridad.*² Un debate —austeridad/crecimiento— que no va a ser fácil pero que es imprescindible y que requiere la convocatoria de muchas fuerzas sociales para conformar “un nuevo contrato social” que dé nueva vida a la construcción de Europa.

AGRADECIMIENTO A LOS AUTORES

De todos estos temas tratan estas páginas, comenzando por analizar el proyecto de construcción europeo desde una perspectiva histórica, sobre el que tratan los trabajos de Francisco Comín, José M.^a Jordán Galduf y Federico Mayor Zaragoza, que nos aportan elementos fundamentales para comprender la situación actual y que dibujan el marco de referencia del conjunto del monográfico. Un segunda parte aborda el papel de la UE en el escenario actual, que analiza José Ignacio Torreblanca, y las implicaciones de la “nueva gobernanza europea” tanto desde el ámbito político como económico y social, en las que se centran las reflexiones de Alejandro

² Berlinguer, Enrico (1978): *Austeridad*. Barcelona, Ed. Materiales, pp. 55-56.

Cercas, Ronald Janssen, Christophe Degryse y Phillippe Pochet, sin dejar de lado los nuevos Estados miembros de la Europa central y oriental, demasiado olvidados en muchos análisis, y que, como señala Béla Galgóczi, se están viendo especialmente afectados por las consecuencias de la crisis de la Eurozona. Este apartado se complementa con análisis específicos sobre temas centrales en el futuro de Europa, como la Unión fiscal como base para refundar la Europa Social, de Jesús Ruiz-Huerta, el papel y el futuro del euro, de Marta Galiano, y las políticas de cohesión y los fondos estructurales como favorecedoras del crecimiento, desde la perspectiva y experiencia italiana, de Franco Garufi.

Un tercer bloque virtual arranca con las reflexiones de Jesús Cruz Villalón acerca del impacto de la nueva gobernanza europea sobre las reformas nacionales de la legislación y políticas laborales, que sirve de punto de partida para el análisis de las políticas y estrategias sindicales propuestas por la CES, de Julia López, y de la amplia y rica valoración que desarrolla Javier Doz sobre la situación de la Unión Europea y su futuro desde una perspectiva sindical, que tiene su continuación con el estudio sobre la quiebra del modelo europeo y las acciones sindicales nacionales y de la CES, en el que Emilio Gabaglio y Juan Moreno defienden una creciente europeización de las respuestas sindicales. A estos trabajos se suman las aportaciones sobre la importancia, dificultades y posibles vías para la creación de un marco jurídico para la negociación colectiva transnacional en la UE, de Reingard Zimmer. Este bloque termina de tomar cuerpo con dos contribuciones de distinta naturaleza, pero interrelacionadas y de especial importancia; la necesidad de que el sindicalismo europeo asuma su dimensión global, de Isidor Boix, y la apuesta que desde la experiencia del sindicalismo alemán aporta Annelie Bunttenbach, defendiendo un cambio de rumbo en la construcción europea para conseguir una Europa más social.

El monográfico se cierra con el análisis de las crecientes relaciones entre el empleo y la pobreza, en estrecha relación con las desigualdades sociales, la importancia del empleo de calidad y del modelo social europeo, de Rodolfo Gutiérrez. Finalmente, se incluye una breve biografía de la pintora Menchu Gal, que ilustra el recorrido de estas páginas y a cuya Fundación queremos agradecer el permiso para la reproducción de algunas de sus obras en estas páginas.

Tenemos que agradecer el valor del análisis y el trabajo de las personas que nos aportan sus consideraciones desde distintos puntos de vista pero, como observará el lector, todas ellas relacionadas. Un trabajo especialmente generoso, porque se ha llevado a cabo en un escenario complejo que ha ido cambiando rápida y convulsamente, desde que el Consejo Editorial de la revista diseñara las princi-

pales líneas de reflexión de este monográfico, a comienzo de este año, expresadas en la pregunta de ¿qué Europa queremos? Su contribución nos ayuda al empeño de CCOO por construir un mundo más justo, solidario y democrático.

Finalmente, aunque no es habitual en estas páginas, queremos expresar nuestro reconocimiento a Luis Toharia Cortés, fallecido el pasado mes de febrero, al conocimiento que nos aportó en el estudio de la economía laboral —cuando este era prácticamente inexistente en España— con un espíritu crítico, abierto y ajeno a dogmatismos; inseparable de su humildad y calidad humana. Luis Toharia participó directamente en los problemas que debatíamos —desde la transición democrática— en relación al mercado de trabajo y las relaciones laborales, y contribuyó a que el sindicalismo de nuestro país haya sido más consciente de las implicaciones de su compromiso solidario. Quizás la mejor muestra de reconocimiento sea la relectura del artículo que, junto con su equipo de la Universidad de Alcalá, publicó en la anterior *Gaceta Sindical: Reflexión y Debate*³. Gracias a la generosidad de personas como él cobra vida cada número de esta revista.

JORGE ARAGÓN

*Director de Gaceta Sindical:
Reflexión y Debate*

FERNANDO LEZCANO

*Secretario de Comunicación
de CCOO*

³ Toharia, L. (2011): “El debate sobre las reformas necesarias para la economía española: el mercado de trabajo”, *Gaceta Sindical: Reflexión y Debate* n.º 17, *Políticas para una salida social de la crisis*. CCOO.